



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
18 de mayo de 2015
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Humanos

Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Finlandia

Adición

Información recibida de Finlandia sobre el seguimiento de las observaciones finales*

[Fecha de recepción: 1 de mayo de 2015]

Párrafo 10

- i) [B2]: Con respecto al proyecto de revisar la legislación relativa a la detención de extranjeros, se requiere más información sobre las medidas adoptadas desde la aprobación de las observaciones finales del Comité el 24 de julio de 2013, particularmente en cuanto a:
- a) Los avances en la aprobación de esa legislación, indicando la fecha en la que está previsto que se apruebe la nueva ley;
 - b) Las medidas distintas a la privación de libertad que contempla la legislación, incluidas las aplicables a los adultos; y
 - c) Las garantías para asegurar que la detención administrativa por motivos vinculados a la inmigración está justificada como medida razonable, necesaria y proporcionada, también para los adultos.
- ii) [C2]: Con respecto a las condiciones de vida en el centro de detención de Metsälä, se solicita más información sobre el número de migrantes irregulares y de solicitantes de asilo detenidos en los tres últimos años, así como sobre la duración de la detención y la capacidad del centro

1. Actualmente, la detención es una medida cautelar de último recurso. Solo se aplica si existen motivos muy serios, particularmente en el caso de menores. Los solicitantes de asilo albergados en centros de acogida pueden desplazarse libremente por Finlandia. Sin embargo, si la identidad o el itinerario de viaje hasta Finlandia de un solicitante de asilo no están claros, este puede ser internado en un centro de detención mientras se resuelve el asunto. El centro de detención tiene un régimen cerrado y los internos no están autorizados a salir de él.

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.



2. Actualmente hay dos centros de detención en Finlandia. Uno de ellos se encuentra en Metsälä, Helsinki, al lado del Centro de Acogida de Metsälä, que forma parte del Departamento de Servicios Sociales y Atención de la Salud de la Ciudad de Helsinki. El centro de detención tiene capacidad para un total de 40 personas. En otoño de 2014 se abrió un nuevo centro con capacidad para 30 personas, que está conectado con el centro de acogida de Joutseno, mantenido por el Estado. El Servicio de Inmigración de Finlandia se encarga de la administración, la planificación y la supervisión generales del centro. Desde que se abrió la nueva unidad de detención del centro de Joutseno se dispone de capacidad suficiente y no ha sido necesario recluir a extranjeros detenidos en dependencias policiales.

3. El Parlamento ha admitido un proyecto de ley del Gobierno (HE 172/2014 vp) relativo a la introducción de modificaciones en la Ley de Extranjería y la Ley de Trato a los Extranjeros Privados de Libertad e Internados en Centros de Detención. A tenor del nuevo texto, se prohíbe el internamiento de menores en centros de detención de la policía; se prohíbe también la detención de menores no acompañados que solicitan asilo. Los menores de 15 años no acompañados no pueden ser detenidos por ningún motivo. Además, los menores no acompañados que han cumplido 15 años solo podrán ser detenidos durante un período máximo de 72 horas, prorrogable otras 72 horas en circunstancias excepcionales. Un menor no acompañado que ha cumplido 15 años y solicita asilo solo podrá ser detenido en caso de que se le deniegue la solicitud de protección internacional y de que, tras un proceso de apelación, la decisión de expulsión sea firme.

4. Las medidas cautelares alternativas a la detención, que se especifican en los artículos 118 a 120 de la Ley de Extranjería Nº 301/2004, incluyen la obligación de que el extranjero se presente ante la autoridad, entregue sus documentos o billetes de viaje a la policía o las autoridades de control de fronteras, dé una dirección donde se le pueda localizar, u ofrezca alguna garantía. La medida alternativa a la detención que se emplea con mayor frecuencia es la obligación de comparecencia ante las autoridades. En todos los casos, antes de procederse a la detención de un extranjero se evalúa la posibilidad de utilizar alguna otra de las medidas cautelares especificadas en la Ley de Extranjería. El artículo 5 de esta Ley estipula que deben respetarse los derechos de los extranjeros. De conformidad con dicho artículo, la aplicación de la Ley no puede restringir los derechos de los extranjeros más de lo necesario. Este principio administrativo general de proporcionalidad avala la utilización prioritaria de las medidas cautelares menos estrictas estipuladas por la Ley de Extranjería. No se dispone de estadísticas nacionales sobre el uso de las medidas cautelares alternativas, por lo que resulta difícil evaluar su frecuencia general de uso. En la práctica, se utilizan siempre que se considere que son suficientes para resolver la situación.

5. El 23 de febrero de 2015, el Ministerio del Interior puso en marcha un proyecto para introducir medidas cautelares específicas alternativas a la detención. El proyecto tiene por objeto reducir el número de detenciones, en particular de menores, personas vulnerables y extranjeros con familia. Se trata de estudiar la posibilidad de introducir nuevas obligaciones relacionadas, por ejemplo, con la residencia, y de adoptar medidas de control electrónico. Es probable que las enmiendas legislativas entren en vigor en 2016.

6. Por lo que respecta a la aprobación de las modificaciones a la Ley de Extranjería y la Ley de Trato a los Extranjeros Privados de Libertad e Internados en Centros de Detención antes mencionadas, la Junta Nacional de Policía revisará las instrucciones que se imparten a la policía y hará los cambios necesarios. Se sigue trabajando para ultimar los detalles. Las autoridades policiales colaboran en el proyecto legislativo que examina medidas alternativas a la detención.

Párrafo 11

- i) **[C1]: El Comité lamenta que en la reforma de la Ley de Medidas Coercitivas, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, no se haya tenido en cuenta la recomendación del Comité de velar por que las personas detenidas por la comisión de un delito sean llevadas ante el juez en las 48 horas siguientes a su detención inicial. El Comité reitera su recomendación**

7. En relación con el plazo de cuatro días de prisión preventiva, Finlandia se remite a la información presentada anteriormente. No obstante, a continuación se reiteran y destacan algunos aspectos. En primer lugar, cabe señalar que ese plazo en cuestión es un límite máximo. De acuerdo con el capítulo 3, artículos 4 y 5, de la Ley de Medidas Coercitivas (Nº 806/2011), tanto el funcionario que presenta la solicitud de prisión preventiva como el juez deberán actuar sin demora.

8. No hay ningún instrumento internacional vinculante que haga mención a ese plazo de tiempo. De acuerdo con la práctica establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el plazo máximo es de cuatro días. La práctica comenzó a aplicarse a partir de la decisión relativa al caso *Brogan y otros c. el Reino Unido*, de 28 de noviembre de 1988. La información relativa a la comparación de las legislaciones internacionales de la que se dispuso durante el proceso de reforma general de la Ley de Medidas Coercitivas permitió constatar que en los países europeos existen disposiciones diferentes con respecto al plazo de prisión preventiva, el número de veces en que puede imponerse el plazo estipulado (en el caso de Finlandia, hasta dos veces), la cantidad de días u horas que suman esos plazos y la circunstancia a la cual está vinculado el plazo (formulación de la solicitud de prisión preventiva, aceptación de la solicitud o pronunciamiento sobre la solicitud).

9. Debe señalarse una nueva cuestión. Según las estadísticas nacionales, la mayoría de los detenidos son puestos en libertad durante los dos primeros días de la detención sin que sea necesario formular una solicitud de prisión preventiva. Si el plazo para hacer comparecer a la persona ante un juez fuese más corto de lo que es en la actualidad ello podría dar lugar a que se formularan solicitudes de prisión preventiva innecesarias, lo que, a su vez, implicaría la adopción de decisiones en materia de prisión preventiva innecesarias y alargaría la privación de libertad. Por tanto, es esencial que las disposiciones en cuestión sean convenientemente flexibles.

10. El 24 de febrero de 2014, la Consejería de Justicia estableció un grupo de trabajo encargado de examinar, entre otras cosas, la posibilidad de instituir diferentes alternativas a la prisión preventiva y al mantenimiento de la privación de la libertad de quienes se encuentran en ese régimen. El grupo, cuyo mandato se extiende del 3 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2015, también examinará la posibilidad de hacer más estricta la vigilancia por medios electrónicos de la prohibición de viajar en conexión con la prisión preventiva, así como la posibilidad de transferir la responsabilidad de la custodia de los detenidos, que actualmente corresponde a la policía, dependiente del Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia. Además, el grupo evaluará las consecuencias que tendrá la transferencia de esa responsabilidad en las condiciones de detención de quienes se encuentran en prisión preventiva.

[C1]: Con respecto al derecho a recibir asistencia letrada, se solicita información sobre las medidas prácticas adoptadas para que todos los sospechosos tengan derecho a un abogado a partir del momento de su detención

11. De conformidad con el capítulo 4, artículo 10, párrafo 2, de la Ley de Instrucción Penal (Nº 805/2011) el instructor jefe o el fiscal deberá presentar una solicitud al

tribunal para designar un abogado al sospechoso cuando haya razones para ello, sobre la base de lo dispuesto en el capítulo 2, artículo 1, párrafo 3, de la Ley de Procedimiento Penal. En virtud de esa disposición, se designará un abogado defensor de oficio para el sospechoso cuando: 1) el sospechoso sea incapaz de defenderse; 2) el sospechoso, que no haya contratado a ningún abogado defensor, sea menor de 18 años, salvo que resulte evidente que no requiere abogado; 3) el abogado contratado por el sospechoso no reúna las condiciones profesionales requeridas o sea incapaz de defender al sospechoso, o 4) exista otra razón especial para designar un abogado.

12. A principios de diciembre 2014 se modificó el capítulo 4, artículo 10, párrafo 1, de la Ley de Instrucción Penal y se añadieron nuevas disposiciones (artículos 16 y 17) al capítulo 4. El nuevo artículo 17 se refiere a las notificaciones que se envían a la persona que ha sido privada de libertad tras su aprehensión, detención o ingreso en prisión preventiva. Mediante notificación por escrito se informará sin demora al detenido, entre otras cosas, del derecho a contratar un abogado de su elección, el derecho a que se le designe un abogado defensor sobre la base de lo dispuesto en el capítulo 2, artículo 1, de la Ley de Procedimiento Penal (Nº 107/1998) y el derecho a obtener asistencia jurídica gratuita y a disponer de un abogado.

13. En Finlandia, el derecho a la asistencia jurídica se basa en disposiciones legales y en los razonamientos que figuran en los textos de los proyectos de ley del Gobierno. Incluir disposiciones específicas al respecto en la legislación es la manera más eficaz de garantizar el respeto de este derecho en la práctica. También es importante impartir una formación amplia y adecuada a los funcionarios de la policía judicial.

Párrafo 16

- i) **[B2]: El Comité toma nota de la propuesta de revisión de la Ley del Parlamento Sami (Nº 974/1995) y del proyecto legislativo para la reorganización de Metsähallitus, pero solicita más información sobre:**

a) Los avances realizados en la aprobación de las dos propuestas legislativas.

14. En septiembre de 2014 se presentó al Parlamento un proyecto de ley del Gobierno para revisar la Ley del Parlamento Sami (HE 167/2014 vp) (véanse las respuestas proporcionadas por el Gobierno en junio de 2014, párrs. 18 a 21). En 2013 y 2014 un grupo de trabajo ministerial sobre cuestiones relacionadas con los sami se encargó de examinar y negociar el texto del proyecto de ley. Antes de presentar la propuesta al Parlamento, el Ministro de Justicia negoció el texto con el Parlamento sami. Este dio su consentimiento a la propuesta. La propuesta contenía varias modificaciones de la Ley, entre ellas una revisión de la definición de “sami”. El Parlamento sami consideró que la propuesta de una nueva definición de “sami” era el elemento más importante del proyecto de ley.

15. En febrero de 2015, la Comisión Constitucional del Parlamento presentó su informe. Las posiciones de los miembros de la Comisión no fueron unánimes y la mayoría de ellos votó en contra de la propuesta de revisión de la definición de “sami”. En marzo 2015, una votación en el Parlamento puso de manifiesto que el proyecto de ley del Gobierno y, más concretamente, la propuesta relativa a la definición de “sami”, no serían aprobados por el Parlamento.

16. Con objeto de respetar las opiniones del Parlamento sami, el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley en su conjunto para evitar que el Parlamento de Finlandia aprobara una ley que no contaría con la aprobación del Parlamento sami.

b) Cómo va a asegurar el Estado parte la participación del pueblo sami en el debate sobre la revisión de la Ley del Parlamento Sami y el proyecto legislativo para la reorganización de Metsähallitus.

17. En noviembre de 2014 se presentó al Parlamento un proyecto de ley del Gobierno para ratificar el Convenio N° 169 de la OIT (HE 264/2014 vp). El proyecto de ley incluía las propuestas de enmienda de la Ley sobre Metsähallituslaki (Ley sobre Servicios de Parques y Bosques de Finlandia), a que se hace referencia en el párrafo 22 de las respuestas del Gobierno presentadas al Comité en junio 2014. El proyecto de ley sigue pendiente de la aprobación del Parlamento.

ii) [B2]: Con respecto a las medidas adoptadas para facilitar a todos los niños samis del territorio del Estado parte la enseñanza en su propio idioma, se solicita más información sobre el plan de acción de alcance nacional para revitalizar el uso del idioma sami y su impacto en la enseñanza en sami

18. La condición jurídica de los sami como pueblo indígena fue reconocida en la Constitución de Finlandia en el contexto de la reforma de los derechos fundamentales introducida en 1995. De conformidad con la Constitución (artículo 17, párrafo 3), los sami, como pueblo indígena, tienen derecho a mantener y desarrollar su propio idioma y su cultura. Por tanto, esa disposición garantiza el derecho colectivo de los sami a mantener y desarrollar su idioma y su cultura.

19. La Constitución de Finlandia (artículo 121, párrafo 4) garantiza también el autogobierno lingüístico y cultural sami dentro del territorio sami, es decir, las regiones de origen de los sami, según establece la legislación.

20. La Ley del Parlamento Sami (N° 974/1995) regula el funcionamiento del autogobierno de forma más detallada. Está previsto que el autogobierno cultural evolucione, y será tenido en cuenta en los futuros trabajos legislativos y administrativos.

21. La Ley sobre los Skolt (N° 253/1995) tiene por objeto mejorar las condiciones y los medios de vida de los sami skolt, así como preservar y promover su cultura.

22. El derecho de los sami a utilizar su propio idioma ante los tribunales y otras autoridades públicas, así como la obligación que incumbe a estas de hacer efectivos y promover los derechos lingüísticos de los sami, están regulados por la Ley del Idioma Sami (N° 1086/2003).

23. Finlandia brinda apoyo a la cultura sami de varias formas. En el presupuesto estatal se consigna una partida anual para sufragar el sistema de autogobierno del pueblo sami, además de otros fondos adicionales para el mantenimiento y el desarrollo del idioma, la cultura y el arte de los sami.

24. En julio de 2014, el Gobierno aprobó el Programa de Acción para la revitalización de los idiomas sami skolt, sami inari y sami septentrional. El programa refuerza, entre otras cosas, las actividades de educación preescolar en idioma sami y de inmersión lingüística en ese idioma, así como el desarrollo de la enseñanza en sami en todo el país, y no solo en el territorio sami, donde viven alrededor del 70% de los niños y jóvenes sami. Se impulsará la educación a distancia para garantizar la educación fuera del territorio sami. Además, es necesario aumentar los conocimientos del idioma sami que se imparten en la enseñanza preescolar cualificada y el número de docentes e incrementar los fondos destinados a la producción de materiales de enseñanza.

25. Con el fin de hacer frente al desafío que plantea el derecho a la educación en sami fuera del territorio sami, en 2010 se redujo de cuatro a dos el número mínimo de

alumnos sami por grupo necesario a fin de obtener subvenciones públicas para el aprendizaje enseñanza del sami.

26. Las asignaciones estatales destinadas a la elaboración de material didáctico en lengua sami se han incrementado considerablemente. En 2013 ascendieron a 290.000 euros, en 2014 a 400.000 y en 2015 a 500.000 euros.

27. La Junta Nacional de Educación ha destinado fondos públicos a la formación en el servicio de los docentes en el marco del proceso de revivificación del idioma sami y de la inmersión lingüística en ese idioma.

28. El Parlamento Sami participó activamente en la preparación del Programa de Acción antes mencionado. Designó a los miembros sami que formaron parte de la comisión y a sus representantes en la secretaría de la comisión. El Parlamento sami, junto con otras instituciones clave, expresó su opinión sobre el proyecto de programa. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley sobre el Parlamento sami, las negociaciones entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Parlamento Sami se celebraron en enero de 2014.

29. La Comisión Cultural del Parlamento Sami recibe fondos estatales que distribuye con objeto de subvencionar las actividades de las organizaciones sami y promocionar la cultura sami. Además, el presupuesto del Estado destina recursos, entre otros, a centros culturales, de cine y música para niños sami, bibliotecas públicas, bibliobuses y actividades físicas (por ejemplo, ayudando a las asociaciones deportivas como la Asociación Kalottiurheilu y la Asociación Lapland (Laponia)), así como a actividades internacionales de los sami.

30. Los medios de comunicación también desempeñan un papel importante en la revitalización de los idiomas sami. El objetivo es incrementar los servicios de los medios de comunicación en los tres idiomas sami y extender la cooperación para la realización de programas más allá de las fronteras con Suecia y Noruega.

31. El Museo Sami Siida, situado en Inari, también recibe asignaciones del presupuesto del Estado. Es un museo especial que atesora en sus colecciones la cultura material e inmaterial de los sami de Finlandia y la presenta en diversas exposiciones y publicaciones. El objetivo principal del Museo es apoyar la identidad y la autoestima cultural de los sami. También es responsable del patrimonio cultural arqueológico y de su gestión en la zona sami, en virtud del contrato que suscribió con el Consejo Nacional de Antigüedades en 2011. En 2015, el contrato se actualizó y se amplió para abarcar todas las actividades especializadas relacionadas con el entorno cultural del territorio sami.

32. Finlandia ha participado activamente en las reuniones del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El objetivo es elaborar uno o varios instrumentos que regulen la protección de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales de las comunidades indígenas y locales. Además, se está redactando una ley nacional sobre los recursos genéticos que da efecto al denominado Protocolo de Nagoya relativo al acceso a los recursos genéticos, la utilización de los conocimientos tradicionales asociados, así como la participación en los beneficios que se deriven de la utilización de dichos conocimientos. El proyecto de ley del Gobierno se presentará al Parlamento antes del verano.